

Velasco Alvarado

TOMO II

Conmemorando
52 años
de inicio del proceso
revolucionario de 1968

Octubre 2020

Héctor Béjar

REVISTA

**Imaginando el Perú
post pandemia**

Ediciones Grupo Emancipador Perú



II

Velasco

Alvarado

1968 - 1975

III

LA REFORMA DE LA PRENSA

El 28 de Julio de 1974 debe haber sido el único día en la historia de la prensa peruana en que los diarios agotaron íntegramente sus ediciones a las pocas horas de estar en la calle.

Esa mañana, sus primeras planas anunciaron a los sorprendidos lectores limeños que habían sido expropiados por el gobierno.

La expropiación fue discutida en el más absoluto secreto y planeada como una operación militar. Todos los jefes militares, radicales y conservadores, estuvieron de acuerdo. Los seis colaboradores civiles del régimen nombrados para dirigir los seis diarios de circulación nacional, fueron incomunicados doce horas antes sin darles explicaciones: se enteraron de para qué se les detenía cuando ya estaban apresados por su propio gobierno. Era un test de lealtad. Debían asumir la responsabilidad de una medida que sería atacada mundialmente. Héctor Cornejo Chávez, jurista demócrata cristiano, de impecable carrera política, salió a la televisión a explicar la medida. Él mismo fue el primer director nombrado para *El Comercio*, el viejo diario de la familia Miro Quesada.

La reforma de la prensa fue una de las últimas medidas significativas del gobierno de Velasco. Disponía la transferencia de los diarios de circulación nacional (en aquella época aquellos que editaban más de 20.000 ejemplares) a sectores de la población peruana determinados de la siguiente manera: *El Comercio* a las organizaciones campesinas; *La Prensa* a las comunidades laborales (formadas por trabajadores de la industria, minería, pesquería y telecomunicaciones y resultantes de la reforma de la empresa); *Correo* a las organizaciones profesionales; *Expreso* y *Extra* a la comunidad educativa (formada por los representantes de los maestros, trabajadores no docentes y estudiantes adultos); *Ojo* a las organizaciones culturales, y *Última Hora* a las organizaciones de servicios (cooperativas de servicios y demás organismos de dicho sector). *La Crónica* sería el órgano periodístico del gobierno.

El Decreto Ley de expropiación establecía el plazo de un año para organizar la transferencia. Para dicho período el gobierno nombró a directores y gerentes de los diarios.



Este fue el más rudo golpe que la prensa oligárquica peruana había recibido en toda su historia. Las familias propietarias quedaron paralizadas por la sorpresa. En realidad no habían hecho nada para merecerlo. Su oposición era sesgada, sibilina, pero no frontal. En el pasado compartieron la abundancia de los tiempos prósperos o callaron para no alterar la paz impuesta por las dictaduras. Ahora les era difícil comprender que, más allá de las motivaciones que cada integrante de la Junta Revolucionaria, el COAP y el Consejo de Ministros tenía, la expropiación respondía a la lógica histórica que había unido la suerte de los grandes diarios a la de las familias más ricas o los grupos económicos más poderosos. Hubo protestas aisladas en Miraflores, el barrio de la clase alta, y allí quedó todo...por el momento.

Caído el dictador Leguía en 1930 como resultado de la crisis de 1929, la familia Miró Quesada usó su diario *El Comercio* para enfrentar las huelgas, los intentos de golpe de Estado, las insurrecciones populares, la acción política del comunismo y del APRA y para influir sobre el caudillo militar Sánchez Cerro. Sánchez Cerro fue asesinado en 1933 y el director de *El Comercio* y su esposa fueron también asesinados en 1935 mientras el APRA, el Partido Comunista y los sindicatos eran ilegalizados para dar tiempo a la oligarquía a recuperarse tras los turbulentos años que siguieron a la crisis del 29. Entre 1931 y 1945, catorce años de “emergencia” e ilegalidad, *El Comercio* apoyó a las dictaduras del general Benavides y el banquero Prado. Otra crisis, la de posguerra mundial, obligó a la oligarquía a soportar una nueva irrupción del movimiento popular acaudillado por el APRA y a usar las baterías de sus diarios *La Prensa* y *El Comercio* contra el Frente Democrático Nacional, que ganó las

elecciones de 1945 por abrumadora mayoría. Pero en 1948 la batalla oligárquica contra el gobierno constitucional del Dr. José Luis Bustamante y Rivero, librada principalmente desde *La Prensa* y *El Comercio*, culminó en otro golpe de Estado promovido por los exportadores algodoneros y azucareros y encabezado por el general Manuel Odría. Quedaba en el camino el cadáver de otro director asesinado: el industrial Francisco Graña Garland, director de *La Prensa*, que se opuso a los entendimientos del APRA con la Standard Oil para entregarle la provincia de Sechura, rica en petróleo y fosfatos.

Luego de ocho años de dictadura y estando ya *La Prensa* bajo el control de la Sociedad Nacional Agraria, fue este diario el que impulsó el relevo del desgastado general Odría por una alianza política entre la oligarquía y el APRA, bajo la forma de un régimen que recibió el nombre de “convivencia” y que se prolongó bajo el gobierno de Belaunde Terry con el breve intervalo del gobierno militar de 1962 – 63.

La democracia parlamentaria que vivió el país durante esos 12 años (1956 – 1968), excepto el gobierno militar de 1962, sirvió para exhibir, a la vez que la ampliación y bifurcación de los grupos oligárquicos, las contradicciones e intrigas que los enfrentaron.

Se crearon nuevos diarios. A *El Comercio* de los Miró Quesada, *La Prensa* y *Última Hora* de Beltrán y *La Crónica* de los Prado se unieron *Correo* de Luis Banchemo, joven y acaudalado pesquero, y *Expreso* y *Extra* de Manuel Ulloa, financista vinculado a intereses norteamericanos.

Cada uno de estos diarios desarrolló una misión en la economía y la política. *El Comercio* defendió los intereses de industriales nacionales y propició el fortalecimiento del Estado y las fuerzas armadas. *La Prensa* fue vocero de las empresas extranjeras y los terratenientes y predicador del comercio libre. *La Crónica* siguió sin mayor audacia la política de la familia Prado en el mundo de la banca y las finanzas. *Correo* libró campañas para que se exonerase de impuestos a sus propietarios, los pesqueros. *Expreso* secundó la captura del populismo belaundista por los grupos económicos de industriales y financistas, brokers de la banca privada internacional que endeudaba al país.

Y fue también en estos diarios donde se registró el debate sobre la ilegal presencia de la International Petroleum Company que al desgastar al gobierno de Belaunde fue el detonante de la revolución de Velasco, cuando *La Prensa* sostuvo que era legal el laudo arbitral firmado en oscuras circunstancias en Londres en 1922, por el cual se determinó bajo la presión del gobierno inglés, que los yacimientos petrolíferos de La Brea y Pariñas

pertenecían a La International Petroleum Co. Y que, por tanto, ésta no estaba obligada a pagar impuestos al Estado peruano.

Para quien se aproximase a la situación de los medios de comunicación en esos años, era notorio que sólo los grupos de poder económico tenían la propiedad de los diarios de gran circulación. Las nuevas fuerzas sociales, la clase media creciente, los sindicatos, los campesinos, los intelectuales que surgían de las universidades masificadas no tenían medios de expresión. No existían para la “gran” prensa. Las empresas extranjeras, en particular la IPC y la Cerro de Pasco Corp.; la familia Gildemeister, que financiaba a Pedro Beltrán para reorganizar *La Prensa* siguiendo el modelo del *New York Times*; la Sociedad Nacional Agraria; el Banco Popular y las múltiples empresas de los Prado; la Sociedad Nacional de Pesquería; los grupos Ulloa y Banchero y las familias Prado y Miró Quesada, eran quienes transmitían, por encima de sus contradicciones, un sostenido mensaje de defensa de la propiedad privada y del sistema, a través de cientos de miles de ejemplares diarios. Y a la vez silenciaban las actividades del movimiento popular y el debate de los problemas nacionales más urgentes. Los diarios fueron instrumentos de defensa del sistema, armas eficaces de persuasión conservadora en un país que requería, con cada vez mayor urgencia, profundas reformas sociales.



La configuración social y económica del Perú cambió a partir de los cincuenta. Su población creció en cerca del 3% anual y decenas de miles de campesinos migraron hacia las ciudades. Por los sesenta, más de 150 mil nuevos habitantes llegaban cada año a Lima. Las migraciones se extendían también hacia los valles de la Selva alta y la vieja estructura del latifundio empezaba a desintegrarse. Los migrantes del campo se organizaban en sindicatos, en los cálidos valles del Cuzco. Las comunidades campesinas se movilizaban hacia la recuperación de sus tierras, enfrentándose a la Cerro de Pasco Copper Corp., que acaparaba las inmensas pampas de Junín y Cerro de Pasco. Las familias latifundistas se refugiaban en Lima y otras ciudades importantes abandonando sus tierras. Y en la capital, densas “barriadas” rodeaban las zonas urbanas, presionando sobre una industria incipiente que no podía crear más de 10 mil empleos por año.

Así creció y se multiplicó el movimiento popular, que buscó expresarse a través de huelgas, invasiones de tierras, guerrillas, por medio de la Universidad y los partidos y

movimientos políticos de una clase media nueva que también presionaba sobre la oligarquía, buscando ubicarse en la estructura de poder del país. Esta realidad cada vez más urgente y compleja llevó a la oligarquía a propiciar mediante la democracia representativa de 1956 – 68 una salida política a la presión social. Pero la prensa siguió incólume: ni las clases medias, y menos aún los obreros y los campesinos llegaron a tener la posibilidad de difundir sus reclamos e ideas a través de los medios masivos de comunicación. Los diarios oligárquicos podían discrepar mucho entre sí, sirviendo a los intereses que representaban; pero todos ellos portaban finalmente una sola interpretación de las cosas y una única imagen del país: la de sus dominadores.

Fue esta contradicción la que hizo crisis cuando, abierto el período de reformas sociales de 1968, se inició la reforma agraria y la reforma de la empresa capitalista. La acción de los militares, su argumentación nacionalista, su promesa de una sociedad “sin explotadores ni explotados”, sus ataques al imperialismo y a la oligarquía, sus llamados a la liberación social, su apertura hacia los países socialistas, ponían en cuestión todo lo que los diarios habían sostenido, afirmado y argumentado. En la prensa oligárquica, que un día fue aceptada como confiable y seria por la clase media urbana y una parte de los sectores populares, ya no se sentían expresados ni los militares nacionalistas, ni los revolucionarios civiles, ni la tecnocracia del Estado y menos aún los sectores campesinos que iniciaban su organización a partir de la reforma agraria o los obreros que empezaban la cogestión de las empresas capitalistas reformadas.

Y por otra parte esta prensa que, de una u otra manera, había estado siempre delante o detrás del poder político se encontraba por primera vez sin poder. Sustentada en los grupos económicos, quedaba fuera de juego en la medida en que éstos perdían su influencia sobre las decisiones gubernamentales.

Apenas iniciado el proceso revolucionario de 1968 y luego de la tensión entre la dirección del diario y los periodistas que siguió a la deportación de Manuel Ulloa, *Expreso* y *Extra* fueron cooperativizados. Cuando se derrumbó el imperio Prado y el Banco Popular fue comprado por el gobierno, *La Crónica*, una de las empresas del imperio, cayó bajo el control del Estado. Y en *El Comercio* empezó a desarrollarse una intensa lucha entre los propietarios de un lado, y el sindicato de trabajadores y la comunidad industrial del otro. Acostumbrados a que las leyes sociales se detuvieran en la puerta del diario, los Miró Quesada se negaron a reconocer al sindicato y maniobraron contra la comunidad industrial, generando un conflicto interno que Pedro Beltrán, el director de *La Prensa*, cuidó de no causar en su propio diario.

No obstante estas escaramuzas, Velasco gobernó manteniendo los diarios más importantes en manos privadas durante casi seis años, desde octubre de 1968 hasta julio de 1974. Y nadie que revise lo publicado en ese período podría decir que aquella fue una prensa de oposición. Sacrificado *Expreso* y perdida *La Crónica*, la prensa oligárquica se inclinó cautamente ante el poderío militar. Ciertamente, no se limitó a ello. Atacó a los “asesores comunistas”, se irguió en defensa del gobierno frente a las huelgas, y resaltó sucesivamente a las figuras del general Benavides, el general Artola y el contralmirante Vargas Caballero ubicándolos como alternativas moderadas al general Velasco, en la esperanza de agudizar los conflictos internos en el gobierno, llevándolo hacia una posición anticomunista, “occidental y cristiana”. Sus editorialistas hicieron prodigios de equilibrio frente a la ocupación militar de Talara, que aplaudieron después de haber defendido a la IPC; o se resignaron ante la expropiación de los grandes complejos agroindustriales del azúcar; o aceptaron a regañadientes las sucesivas nacionalizaciones. Pero nunca pasaron a la oposición directa. No puede compararse esta extrema cautela con la agresividad de 1956 frente a Odría, o la agitación demagógica de 1945 contra Bustamante; o, incluso los violentos ataques de algunos diarios contra Belaunde en el período 1963 – 1968.

Por todo ello no podría decirse con fundamento que la expropiación de 1974 tuvo por móvil el “silenciamiento de la oposición”. Antes bien fue un momento más en la estrategia de reformas que tenía programado el gobierno de las Fuerzas Armadas, tratando de adecuar la situación de los medios de comunicación a la recomposición social que iba impulsando. No fue ni una acción premeditada para eliminar obstáculos ni un exabrupto arbitrario del poder.

Las paradojas de la nueva prensa

La aspiración a una prensa popular iba pareja con el proyecto social que presidía la conducta de los grupos más avanzados del proceso, incluido el presidente Velasco. En una instancia final el proceso peruano de 1968 – 1975 perseguía sentar las bases de una democracia social sustentada en las organizaciones populares. Las ideas del socialismo libertario impregnaban el discurso ideológico de la revolución y orientaban la acción de sus reformadores. Pretensión paradójica si se considera que nacía de un régimen militar que usaba los mecanismos de la burocracia del Estado.

Esa paradoja se reflejaría en la reforma de la prensa, que para tener éxito implicaba la

existencia de organizaciones populares fuertes, conscientes y activas, y la verdad es que ellas recién nacían, incluso en el caso de las jóvenes ligas agrarias. El proyecto de la nueva prensa quería dotar de voz a 200 mil trabajadores agrupados en unas 3.700 mil comunidades laborales; a cuatro millones de campesinos organizados en casi dos millares de organizaciones de base; a 800 consejos educativos comunales; a 3.500 cooperativas de servicios; en fin, a multitud de organismos de todo tipo. La inmensa mayoría de ellos eran una creación de la revolución, en proceso de nacimiento y maduración. Ciertamente, la nueva prensa recibía el encargo de actuar como elemento de impulso y organización. Pero esta misión no fue siempre percibida y comprendida, porque requería también la renovación del gremio periodístico habituado en parte a las ideas y prácticas de la antigua prensa oligárquica.

Por otro lado, el proyecto ignoraba la existencia de dos sectores importantes y de presencia activa en la vida nacional: el movimiento sindical y las organizaciones de pobladores de los “pueblos jóvenes”. La inexistencia de un movimiento sindical que adherido a la totalidad de los planteamientos ideológicos de la revolución (la Confederación de Trabajadores de la Revolución Peruana CTRP, propiciada por algunos sectores del gobierno nació en medio de agudos conflictos internos de éste) y la dispersión de las organizaciones sindicales (cuatro centrales nacionales, crecido número de federaciones independientes y multitud de sindicatos no adheridos a ninguna matriz) planteaban el problema de a qué central favorecer o la tarea aun más compleja de coordinar organismos competitivos o rivales, y aun intransigentemente opuestos a la revolución. El problema sindical, siempre espinoso y candente, se erigía así en una fuerte limitación presentada por la realidad al proyecto de una prensa popular, a pesar de que entre 1968 y 1975 fueron organizados tantos sindicatos como todos los que habían nacido en el transcurso de toda nuestra vida republicana.

El proyecto peruano requería una prensa popular que, por serlo, fuese a la vez independiente y crítica del poder político. Ésta, una de las tantas notas singulares del proceso revolucionario, tropezaba con dos limitaciones. De un lado, los niveles medios del poder burocrático no estaban dispuestos a ser aguijoneados por una prensa de tal tipo. Y del otro, ello requería también, por parte de las organizaciones, de una conciencia revolucionaria y nacional y un planteamiento globalizador de los problemas, la superación de las demandas localistas o economicistas. Nos encontrábamos con dos fuerzas en pugna; el poder militar, que tendía a centralizar el mando, acentuar el hermetismo de las decisiones, atenuar las críticas y dosificar la información; y la presión popular, que ponía el acento, antes que en una estrategia coordinada nacionalmente, en múltiples demandas reivindicativas para las cuales, la revolución no estaba preparada.

Transformar la prensa capitalista

Para que los diarios fuesen voceros del pueblo organizado, no bastaba que las organizaciones tuviesen representación en las asambleas y los comités directivos. Una prensa revolucionaria, socialista, requería la transformación total de la antigua prensa capitalista. Ello pasaba por múltiples vías.

Era necesario cambiar la fuente de financiamiento de la prensa. La publicidad capitalista debía dejar de ser el principal recurso de subsistencia y dejar de condicionar el contenido y la diagramación de los diarios. Tampoco había que acudir al Estado. Las organizaciones y los lectores deberían ser los principales financiadores de una prensa realmente libre. Porque, además de la antigua prensa oligárquica, sólo *El Comercio* era rentable. El resto de los diarios subsistía por la subvención de las grandes empresas.

Era necesario alterar los patrones de circulación. Los diarios eran hechos para la capital más que para las provincias y dentro de la capital, para las clases de más alto poder adquisitivo, más que para el pueblo. El objetivo era vender hábitos, ideas, convencer a aquellos que podían comprar, votar o influir de algún modo en el país, chantajear, atemorizar, adular o presionar a los gobernantes. Con la expropiación, los objetivos cambiaban y había que dirigirse al pueblo de la capital, a las provincias, y lograr una información orientadora y pedagógica. Para ello el objetivo de “vender más” debía ser reemplazado por el de “educar e informar más”. Lo que no se lograría sin alterar, además del financiamiento, los mecanismos de distribución y comercialización de los periódicos.

También el contenido tuvo que ser revolucionado. La prensa oligárquica se caracterizaba por la pobreza y mediocridad de sus páginas de opinión, su dependencia de los monopolios internacionales de la información, particularmente UPI y AP, la ausencia de cobertura del medio sindical y popular, la exaltación del tema frívolo, y la crónica sórdida, aún en los diarios “serios”, la evasión de los problemas nacionales y la indiferencia, cuando no la hostilidad hacia los intelectuales.

A las limitaciones que hemos expuesto hay que añadir el corto período de reforma, que podemos ubicar entre julio de 1974 (decreto de expropiación) y marzo de 1976 cuando, derrocado el presidente Velasco y antes de someterse al Fondo Monetario Internacional, Morales Bermúdez varió la orientación del experimento mediante el brusco cambio de los directores y el control total de los diarios por el Estado, a través del Sistema Nacional de Información. Desde ese momento hasta julio de 1980, es decir casi cinco años, la prensa



reformada se transformó en una prensa intervenida y amordazada. Y así como en la reforma agraria hay que distinguir seis años de reforma (1969 – 1975) de 25 años de contrarreforma (1975 – 1990) así también en la expropiación de la prensa hubo 19 meses de socialización (julio 1974 – marzo 1976) por cinco años de mordaza (1976 – 1980) hasta que, una vez electo, Belaunde devolvió los diarios a sus antiguos propietarios.

Aquellos 19 meses de prensa reformada dejan sus huellas en los siguientes logros: mejora en la calidad de los artículos de opinión y ampliación de los temas tratados en las páginas editoriales; apertura de las páginas internacionales a Europa, América Latina, los países socialistas y el Tercer Mundo; abundancia de información sobre el movimiento sindical y popular; orientación nacionalista y antiimperialista, desmenuzamiento de los prejuicios y hábitos capitalistas; en general, una evidente mejora en el contenido y presentación de la prensa. Las páginas de los diarios se abrieron a respetables intelectuales peruanos, a científicos sociales, periodistas de primera calidad y dirigentes sindicales y populares.

Aparte de ellos, e independientemente de los ámbitos asignados por la Ley, los diarios se dejaron llevar por su propia vocación para la elección de su temática. *El Comercio* dedicó amplios espacios a la información sobre las organizaciones campesinas, en coordinación con la Confederación Nacional Agraria (CNA). *La Prensa* se extendió sobre el tema educativo. *Expreso* abundó en información sobre las reclamaciones sindicales. *Correo* se dedicó preferentemente a los problemas de los barrios populares. Y además de esta variada temática, los diarios asumieron posturas diferentes y hasta encontradas respecto de asuntos como la posición ideológica de la revolución, la organización y participación popular, el cooperativismo y la autogestión, las relaciones entre la revolución y los partidos políticos,

etc. Fue una prensa abundante en temas ideológicos, frente a los cuales asumió también opciones diversas, desde el socialcristianismo de *El Comercio* cuando fue dirigido por Héctor Cornejo Chávez, hasta el marxismo de *Expreso*, pasando por las posiciones libertarias de *Correo* y *Última Hora* cuando fueron dirigidos por Hugo Neira y Francisco Guerra García, respectivamente. Estuvo muy lejos de ser, como se ha dicho, una prensa regimentada y monocorde.

Los partidos de la oposición, Acción Popular del ex presidente Belaunde y el APRA de Víctor Raúl Haya De la Torre, no hicieron ningún esfuerzo significativo por publicar una prensa cotidiana propia. Acción Popular, nunca había tenido un vocero periodístico pues durante su historia usó primero a *La Prensa* de Beltrán y, luego, a *Expreso* de Ulloa como órganos oficiosos. *La Tribuna* aprista, éxito periodístico en 1930 y 1945 o en la ilegalidad, fue un fracaso a partir de 1956, cuando el APRA se alió con los ex dictadores Prado y Odría, y llegó a la quiebra en 1968. La otra personalidad de oposición, Luis Bedoya Reyes, prefirió continuar siendo alcalde de Lima durante los primeros tiempos del gobierno de Velasco. En general, la derecha opositora prefirió esperar y renunció a dar la batalla en el terreno de la política y el periodismo, aun después que los diarios oligárquicos fueron expropiados, puesto que no estaba prohibido crear nuevos diarios o abrir una prensa de oposición. Ello se reflejó en que el debate de la prensa en proceso de socialización, entre julio de 1974 y marzo de 1976, no tuvo interlocutores u opositores.

El proyecto de socialización de la prensa no podía ser extraño a las circunstancias que vivía el país y al acontecer interno del gobierno revolucionario. El decreto de expropiación se produjo cuando los comienzos de la crisis económica, el endurecimiento político del régimen, la agudización de sus conflictos internos y la enfermedad del presidente Velasco conformaban un cuadro que no era favorable a la realización del proyecto. En enero de 1975 una huelga de policías culminó en graves disturbios en Lima. Agitadores derechistas encabezando a masas de saqueadores lograron incendiar el diario *Correo* y atacaron *Expreso*, siendo rechazados por los trabajadores de este último. En agosto de 1975, a pedido de los generales Richter y Morales Bermúdez, el gobierno clausuró varias revistas de oposición y deportó a un grupo de políticos y periodistas de derecha a izquierda. Y, finalmente, el 29 de agosto del mismo año un golpe de Estado relevó al presidente Velasco.

Entre agosto de 1975 y marzo de 1976 la prensa en trance de socialización jugó sus descuentos, a pesar de que el lenguaje izquierdista del gobierno y del nuevo presidente Morales Bermúdez se agudizaba con llamamientos al socialismo. Las revistas de la derecha

fueron reabiertas y contrariamente a la cautela demostrada por ésta durante el gobierno de Velasco, atacaron violentamente a la prensa expropiada. Finalmente, cuando los diarios *El Comercio* y *Última Hora*, expresaron su desacuerdo con el arbitrario pase al retiro de los generales izquierdistas José Graham y Leonidas Rodríguez, y el gobierno de Morales decidió someterse a los dictados del FMI, todos los directores fueron cambiados. El control de la Oficina Central de Información OCI se acentuó hasta regimentar a los diarios impidiéndoles responder a los ataques de la derecha, que era sistemáticamente alentada. Las Asociaciones Civiles, que representaban a las organizaciones populares, languidecieron hasta su extinción. Y el proyecto de socialización de la prensa también se extinguió, asfixiado por un gobierno que ya era abiertamente derechista.

No obstante y a pesar de su brevedad, la prensa diaria de los años 1974 – 1976 quedará como un experimento aleccionador, una etapa en que el pueblo fue sujeto y protagonista de la noticia y actor importante en el manejo de los medios masivos de comunicación escrita. Una experiencia que será inolvidable tanto para los que tuvimos alguna intervención en ella, como para quienes piensan erradamente que su dominio monopólico sobre la opinión e información es inalterable y eterno en América Latina.

IV

VIEJOS MALES DE LA NUEVA BUROCRACIA

Durante siete años a partir de 1968, el Estado peruano aceleró una expansión que venía realizando gradualmente desde la década del cincuenta: inició y profundizó una política petrolera que lo convirtió en importante explorador y extractor y en agente monopólico de la refinación y comercialización de hidrocarburos; asumió la totalidad de la industria de harina y aceite de pescado, incluyendo las fases de captura de anchoveta (hoy devuelta a manos privadas), transformación y comercialización; se convirtió en el primer banquero del país cuando intervino en el Banco Central de Reserva, fortaleció el Banco de la Nación, impidió el proceso de desnacionalización que sufría la banca comercial y compró cuatro grandes bancos privados. Logró también el control de empresas financieras y de seguros, creó la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), la entidad más importante de su tipo en el país.



En el sector minero avanzó primero hacia el control de la comercialización exterior, revirtió grandes yacimientos que eran mantenidos como reserva por las transnacionales, asumió la refinación de minerales y nacionalizó la Cerro de Pasco Copper Corp., la empresa minera más importante, y la Marcona Mining, explotadora de los principales yacimientos de hierro del país.

El Estado se reservó también la industria básica, nacionalizó la industria del cemento y parte de las industrias química y papelera, las telecomunicaciones, los servicios eléctricos y el transporte ferroviario. Monopolizó la comercialización externa de los principales productos agrícolas (algodón, lana, azúcar y café), y la importación de los principales insumos para la

industria y la agricultura, y dio los pasos iniciales hacia la nacionalización de una parte de la red de comercialización urbana.

Al cabo de siete años, el Estado había pasado del 30% al 50 % de participación en el total de inversiones del país, había creado siete nuevos ministerios y las empresas públicas se multiplicaron, de 12 que existían en 1968 a 174 en 1975. De pobre instrumento de las empresas y los terratenientes, exportadores y banqueros peruanos, fue logrando poder y autonomía hasta convertirse en el más poderoso ente económico. Este proceso expansivo fue resultado de la afectación de grandes intereses cuya lista era larga: Gildemeister, ITT, W.R. Grace, Cerro Corp., Marcona Mining, Gulf, Standard Oil y muchas otras compañías fueron expropiadas en beneficio de los intereses nacionales. Habíamos tenido un aparato estatal anodino, impotente, ineficaz para gobernar los destinos del país, disminuido por los banqueros y los latifundistas que lo querían sólo como un órgano de administración de recursos exiguos y no como un instrumento de un desarrollo en el que no creían. Cuando las nacionalizaciones se sucedieron una a otra, las empresas públicas y los nuevos ministerios surgieron como hongos. Eran la expresión de una nueva época y, en cierto modo, también el signo externo de lo que ganábamos como nación, en poderío e independencia.

En los países capitalistas desarrollados, el crecimiento del Estado se desarrolla *en favor y para* el sostenimiento de los monopolios y, por tanto, forma parte de la consolidación del sistema de explotación. En el Perú, se produjo *en abierta contradicción* con los monopolios extranjeros y los latifundistas y capitalistas: era el paso inicial e imprescindible de un proceso revolucionario que removía las bases del sistema de explotación contra el pueblo peruano. Era una condición necesaria para el desarrollo independiente del país.

La “nueva clase”

Condición necesaria, pero no suficiente. Porque este fenómeno traía también, como consecuencia, el incremento de los grupos burocráticos y el crecimiento de su poder. Los nuevos organismos significaban miles de millones de soles de recursos que debían ser administrados por los burócratas, mejor status y más alto nivel de vida para éstos, más posibilidades de ascender en la escala social para la clase media instruida que aprovechaba así en primer lugar las oportunidades creadas por una revolución que había sido hecha para los grupos sociales más oprimidos y de menores ingresos. Lo más importante de todo es que también significaba mayor control administrativo y mayor poder político en la medida en que la concentración de recursos en manos del Estado aumentaba la dependencia de las organizaciones populares. Así, la suerte de cualquier modesta cooperativa de trabajadores, o

de una organización vecinal por ejemplo, dependía de la decisión de un burócrata y hasta de su mayor o menor diligencia en realizar determinados trámites. Todo esto aumentaba también las posibilidades de corrupción en los organismos públicos e incrementaba el oportunismo de quienes no pertenecen a la administración, puesto que hay que inclinarse para conseguir como favores los servicios que el propio pueblo paga.

Siendo la desocupación uno de los males crónicos de la estructura capitalista subdesarrollada de nuestro país, cualquier alteración de la tranquila vida de los empleados públicos implica un problema social de grandes dimensiones y también un problema político de relación con un numeroso sector social. El ciclo de reformas que se había decidido e impulsado desde los altos niveles del poder mantuvo casi intacta la organización de la administración pública. El temor a generar un problema social que la revolución no hubiese podido controlar, unido a la mentalidad burocrática de los militares, fueron las causas de que el proceso peruano, en vez de iniciar una revolución en la administración pública, apenas si ensayase una redistribución administrativa para tratar de que fuese eficiente la maquinaria que había creado.

Exceptuando a la izquierda civil y militar que ingresó al aparato del Estado para impulsar desde allí los cambios revolucionarios y a la luz de su actitud frente al proceso revolucionario, es fácil distinguir dos tipos de burocracia: la que, con indiferencia o abierta acción contraria, sabotaba las reformas o se oponía a ellas; y aquella que las hacía suyas para incrementar su poder. Ambas se sirvan una a otra y se apoyaban mutuamente en la defensa de sus intereses y el incremento de su bienestar, puesto que ambas tenían en común su desprecio por la capacidad del pueblo para decidir por sí mismo y también su temor a que éste, organizado y consciente, pase a transformar profundamente el Estado que era su sustento y modo de vida.

En todos los países de América Latina, la burocracia es el refugio del clientelismo político, y el Perú no es excepción. Sucesivos gobiernos fueron poblando los ministerios con sus adictos. Estos con el arribo de los gobiernos subsiguientes, fueron mimetizándose en el gris uniforme del oportunismo que todo lo admite y justifica. Muchos funcionarios de nivel alto y medio eran y siguen siendo militantes o simpatizantes de los partidos tradicionales al tiempo que hostiles a la revolución. Tuvimos entonces, la paradoja de un aparato estatal que debía transformar las viejas estructuras sociales y económicas de las que él mismo formaba parte y funcionarios que debían aplicar medidas revolucionarias contrarias a su pensamiento e intereses. La reforma agraria y la reforma de la educación figuran entre los primeros lugares en la larga lista de medidas del gobierno que fueron saboteadas mediante una resistencia

pasiva y silenciosa, o trabadas por las leyes y reglamentos del aparato que impedía actuar eficazmente incluso a quienes tenían voluntad y mentalidad revolucionaria.

Imagen de la burocracia

De esta manera, la Revolución Peruana no pudo liberarse de los males del burocratismo. Duplicación de esfuerzos, ausencia de elemental coordinación entre los ministerios, las dependencias ministeriales y las empresas públicas, competencia y rivalidad entre uno y otro organismo, incapacidad de decidir y ejecutar con rapidez, despilfarro de recursos, son los males de esta burocracia.

En la cima del aparato empezó a funcionar pronto una jerarquía que, mediante la clasificación de la información, guardaba los misterios del Estado como en una caja de seguridad y se comportaba como un conglomerado de círculos cerrados frente al exterior. Carente de audacia y despreciadora del idealismo de los revolucionarios a quienes calificaba de utópicos, esta jerarquía no temió exhibir un materialismo sórdido y hizo de la razón de Estado su razón privada.



Gracias a que parece llevar en ella misma la tendencia a la proliferación, nuestra burocracia se las arregla para crear varias plazas innecesarias para cada función necesaria porque al hacer el presupuesto, cada burócrata presiona para tener bajo sus órdenes a la mayor cantidad de funcionarios, secretarías, conserjes y choferes, la mayor cantidad de equipos de oficina y los más lujosos ambientes y escritorios. Cuanto más grande sea su dominio más importante será, aunque su prosperidad parasitaria sea un verdadero escándalo en un país subdesarrollado.

Luego, habrá que justificar la existencia de todo ese aparato en miles de papeles mecanografiados en forma de memoranda, informes, dictámenes y otros documentos, habrá que complicar los trámites internos y externos para que la complicación dé trabajo a más funcionarios.

Pero esto crea también una actividad ilusoria. El papel reemplaza a los actos. Todo, hasta las órdenes más simples, se hace a través de papel. El memorándum sirve para justificar la ineficiencia, fingir trabajo, para defenderse, para vengarse del enemigo o del competidor. Los memoranda, las municiones que los burócratas utilizan en sus frecuentes guerras internas, van acumulándose en montañas de papel que las secretarías archivan y nadie lee.

El crecimiento canceroso de los tentáculos de toda burocracia amplía la distancia entre quienes dan las órdenes y quienes las ejecutan. En las etapas más difíciles del proceso peruano, muchas direcciones burocráticas creían o aparentaban creer, que los funcionarios de menor nivel estaban cumpliendo las normas con eficacia, mientras éstos se imaginaban a su vez que la dirección tenía un planteamiento global, claro y seguro de la situación. Ninguna de las dos cosas era cierta, puesto que existía una incompetencia mutuamente aceptada. Todos saben que las cosas no marchan como debieran pero nadie quiere admitirlo, puesto que hacerlo significaría traer abajo todo el sistema. Por otro lado, nadie quiere correr el riesgo de aventurar planteamientos globales o proponer correcciones, en la inseguridad de que éstos sean admitidos de buen grado por las desconocidas y misteriosas esferas superiores y ante el temor de que causen la desgracia de quienes los plantearon.

De esta manera, el aparato burocrático se vuelve pronto conservador e impersonal, ajeno a los principios e ideales de una transformación social. Por eso, exceptuando a los centenares de hombres y mujeres honestos y preocupados por su país, cuya depresión es constante ante la realidad que los rodea, y que en más de una oportunidad han tenido actitudes decididas y valientes frente al sistema, el conjunto de la burocracia peruana, tanto la que heredamos de la etapa anterior a 1968 como la que fue engendrada por las medidas revolucionarias, podía acomodarse con tranquilidad a regímenes de diversa orientación política. Puede servir con igual ineficiencia a la revolución como a la contrarrevolución, a la dictadura como a la democracia representativa.

En el caso específico del Perú fue notoria la pugna entre los diversos organismos burocráticos y aún entre las reparticiones de cada organismo. Como la vida de los seres humanos no puede dividirse en compartimentos estanco, es difícil delimitar el ámbito de

acción de cada ministerio. Y el que invade el terreno que el vecino supone que le pertenece, no tarda en despertar las iras de éste. Pero ¿cómo establecer si los problemas de los comuneros industriales, por ejemplo, competen al Ministerio de Trabajo porque son trabajadores, o al de Industria, porque están en el sector industrial, o al de Educación porque quieren capacitarse técnicamente, etc., etc.? Esta confusión de límites genera verdaderas guerras entre los ejércitos administrativos y sus jefes, cuyas disputas desorientan al pueblo que no sabe a qué oficina acudir en demanda de respuesta o solución a sus problemas.

Como el aparato burocrático está sometido a rígidas normas de control, son frecuentes los esfuerzos, que llegan hasta lo tragicómico, para fingir o fabricar hechos que acrediten el cumplimiento de tales indicaciones por más que, en la realidad, cada organismo haga lo que le place. Porque los mismos controles que son obstáculo cuando se trata de emprender tareas revolucionarias, son fácilmente burlados para cometer inmoralidades, recibir coimas, usar los recursos y equipos del Estado para enriquecerse o para entregarse a todo género de corruptelas. *Lo que sucede es que el aparato está concebido para proteger el sistema capitalista, no para cambiarlo.* Para concentrar poder, no para delegarlo. Para impedir el flujo de decisiones de abajo hacia arriba y para facilitar el ejercicio del poder de arriba hacia abajo. Para eludir responsabilidades y ocultar la ineptitud y la corrupción. Un aparato así podía servir para iniciar una revolución, pero era un obstáculo para continuarla.

Corrupción burocrática y mística popular

La presencia de una burocracia que, cuando se movía en el sentido de los cambios buscaba incrementar más y más su poder y cuando era opuesta a ellos, desarrollaba una resistencia pasiva y hasta abierta, causó también un enorme perjuicio político a la Revolución, no sólo porque la hacía más penosa y difícil, sino porque disminuía su imagen y prestigio frente a las mayorías nacionales. Entre los revolucionarios que hacían esfuerzos en los niveles más altos del poder para hacer caminar la pesada maquinaria del Estado y la masa del pueblo que escuchaba con incredulidad los discursos sin verlos concretados en su experiencia cotidiana, se encontraba el enorme y grueso colchón que desmentía con su presencia la existencia de una revolución en el Perú. Ninguna prédica, ninguna explicación por más poblada de argumentos, convincente y razonada que fuese, podría contrarrestar el testimonio de indiferencia y cinismo que dan muchos burócratas. Y cuando, al fin, luego de quejas, reclamos y enfrentamientos con el poder, llegaba la justicia revolucionaria, la ejecución de las reformas ya no era suficiente para restañar el dolor causado ni para borrar las huellas de humillación y resentimiento marcadas en el pueblo. Así, cada batalla ganada por la revolución en la eliminación de la injusticia, era también una batalla ganada por sus

adversarios, que lograban desacreditarla y concentrar sobre ella la desazón y amargura de un pueblo que no se explicaba por qué, si había revolución, existía también tanta impunidad para el sabotaje y la injusticia.

Por eso eran ingenuos o malintencionados quienes, desde el gobierno o cerca de él, pretendían volcar sobre determinadas personas u organismos la responsabilidad de lo que era llamado falta de “mística” en el pueblo. La “mística”, es decir la creencia entusiasta y fervorosa de las masas populares en la revolución, solo podía surgir del ejemplo que tenían que dar los representantes del Estado en austeridad, amplitud para el diálogo, compromiso decidido y demostrado en la práctica con las organizaciones populares, y firmeza frente a la corrupción, la inmoralidad y el abuso.



Pero ¿por qué una revolución que no había titubeado ante las poderosas transnacionales, una revolución que le había hecho frente al imperialismo en más de una ocasión, vacilaba frente a un fenómeno de esta naturaleza?

Una parte de la burocracia peruana estaba constituida por los empleados públicos y otra por las autoridades políticas, prefectos, subprefectos, alcaldes y gobernadores. A lo largo de todas las localidades del Perú, tanto los jefes y responsables de los ministerios como las autoridades políticas, eran reclutados entre las familias más influyentes de cada lugar, propietarias de tierras o comerciantes. Cada círculo de “notables” ejercía el monopolio del poder político en cada localidad. En todo el país formaban un sector social integrado por

miles de personas que era parte importante del sistema de dominación interna que servía a la oligarquía y que estaba emparentado con cierto número de oficiales de las fuerzas armadas. Remover este sector social no sólo significaba dispersarse en miles de pequeños frentes provincianos, sino también atacar todo el complejo de relaciones familiares de los miembros de las fuerzas armadas.

La solución de fondo que hubiese permitido el encuentro histórico entre el pueblo y los militares y civiles que impulsaban la revolución era la participación a través de una nueva estructura de gobierno popular a todos los niveles, empezando por la base. Al promediar el proceso ya se estaba haciendo los primeros diseños de un nuevo gobierno local participativo, que hubiera superado el poder de las oligarquías aldeanas y la dominación interna, reemplazándolo con una democracia directa ejercida por el pueblo organizado. Pero mientras se avanzaba hacia esta solución destinada a cambiar definitivamente la naturaleza del Estado en el Perú, rescatando su administración de manos de la burocracia y entregándola al pueblo a través de un gobierno de nuevo tipo, había que proceder sin demora con acciones simples: destituir de inmediato a los burócratas más reaccionarios y cambiar gradualmente a las autoridades políticas como tantas veces y en tantos tonos demandaron las organizaciones populares.

REVISTA

Imaginando el Perú post pandemia

Ediciones Grupo Emancipador Perú